



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: PATRICIA MÁRQUEZ CADAVID
Demandados: ACP COLPENSIONES, PORVENIR S.A. Y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 012 2021 00059 01
Sentencia: S-102

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A., al igual que el grado jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el día 5 de septiembre de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

PATRICIA MÁRQUEZ CADAVID demandó a PORVENIR S.A., a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo, en lo esencial, se declare la ineficacia del traslado efectuado desde el ISS a la AFP PORVENIR el día 21 de marzo de 2000, y desde COLPENSIONES a la

AFP PROTECCIÓN S.A. el 8 de enero de 2013. Se DECLARE que se encuentra válidamente afiliada al RPMPD y se ORDENE tanto a PROTECCIÓN S.A. como a PORVENIR S.A. el traslado a COLPENSIONES de los dineros que tiene aquella en su cuenta individual con sus rendimientos, bono pensional, comisiones de administración, aportes previsionales y aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, para que sean recibidas por COLPENSIONES.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que el 21 de marzo de 2000 se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS-, a través de la AFP PORVENIR S.A., sin brindarle una información completa, adecuada, oportuna y veraz sobre distintos aspectos según los enuncia en el hecho 3º del libelo; que regresó al Régimen de Prima Media el 23 de marzo de 2004, donde estuvo afiliada hasta el año 2013, cuando el día 8 de enero de ese año se trasladó a PROTECCIÓN S.A., sin recibir, tampoco en ese caso, una información oportuna y suficiente. Que solicitó el traslado a COLPENSIONES el 29 de octubre de 2020, el cual fue negado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta el traslado de régimen como lo acreditan las cotizaciones en la historia laboral y que es cierta la solicitud de traslado, la misma que fue negada; frente a los demás hechos expresa que no le constan por ser un hecho ajeno, en el cual no tuvo injerencia. Se opuso además a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y legal. Como excepciones propuso a de imposibilidad de que se decrete la ineficacia de traslado, inexistencia de intereses moratorios, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

PROTECCIÓN S.A. expuso que no le consta ninguno de los hechos que van dirigidos a COLPENSIONES como a PORVENIR S.A.; pero que es cierta la afiliación efectuada por parte de la demandante a este fondo el 8 de enero de 2013, la cual se realizó con base en una asesoría de manera objetiva, íntegra, clara y responsable, en donde se le explicó con claridad todas las características del RAIS. Y que no le consta la solicitud elevada a COLPENSIONES. Se opuso igualmente a todas las pretensiones de la demanda indicando que nunca ha incurrido en omisión del deber de información. Como excepciones propuso la de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema de pensiones, reconocimiento de restituciones mutuas en favor de la AFP e inexistencia de la obligación de devolver los seguros previsionales.

PORVENIR S.A. manifestó en su contestación que el traslado a este fondo fue realizado el 21 de marzo de 2000, con efectividad a partir del 1º de mayo del mismo año, producto de una decisión libre e informada después de haber sido ampliamente asesorada sobre las implicaciones de su decisión, sobre el funcionamiento del RAIS y de indicarle sus condiciones pensionales, retornado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 30 de abril de 2004, y trasladándose nuevamente a PROTECCIÓN S.A. en el año 2013; que a la actora si se le brindó una información clara, precisa, veraz y suficiente de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley 100 de 1993, en la que se expresa el funcionamiento, características y requisitos del régimen de ahorro individual con solidaridad; y que no le constan los hechos que van dirigidos en contra de PROTECCIÓN S.A. ni COLPENSIONES. Se opuso a todas las pretensiones, ya que el traslado de la demandante fue producto de una decisión libre e informada. Y como excepciones planteó la de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2022, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, i) **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por la AFP PORVENIR S.A., entendiéndose para todos los efectos afiliada sin solución de continuidad en el RPMPD; ii) **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES, el valor de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, lo descontado por conceptos de gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexado con cargo a sus propios recursos, y dispuso que al momento de cumplir la orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique; iii) **CONDENÓ** a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES, el valor de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, lo descontado por conceptos de gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexado con cargo a sus propios recursos, y dispuso que al momento de cumplir la orden, los conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique; iv) **ORDENÓ** a COLPENSIONES a reactivar la afiliación de la demandante al RPMPD y recibir todos los valores; y v) **CONDENÓ** en costas a PORVENIR S.A.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, la apoderada de AFP PORVENIR S.A., solicita se revoque la sentencia de primera instancia en su integridad, toda vez que la falta del deber de información que conlleva a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, se

acreditó con el alcance que para esa época se requería, es decir, para el año 2000 solo bastaba con explicar las características generales del régimen pensional, lo que se acredita con el formulario de afiliación, documento que se presume autentico, presunción que no desvirtuó a lo largo del proceso, además debe tenerse en cuenta que ese era el único documento que se les exigía a las AFP para entenderlo no solo como materializado sino como válido el traslado de régimen pensional, por lo que hoy obligar a aportar un documento diferente a ese, es obligarlo a lo imposible, adicional a ello, con el interrogatorio de parte se evidencia que si hubo una asesoría previa al traslado donde se explicaron las condiciones generales del sistema pensional, es decir, las ventajas con respecto al régimen de prima media. Manifiesta que se debe tener en cuenta que es mucho mas favorable para la demandante estar en el régimen de ahorro individual, ya que puede acceder a la garantía pensión mínima. Que se debe tener en cuenta que, en el año 2004 se realizó un proceso de multivinculación, siendo la misma demandante la que decidió afiliarse a PROTECCIÓN S.A., no pudiéndose indicar que fue un traslado horizontal, sino más bien se observa la voluntad de la actora de querer permanecer al RAIS. Que no se debe devolver los gastos de administración y primas de seguros previsionales, ya que estos también se realizan en el Régimen de Prima Media, y al no forman parte integral de la pensión de vejez, por lo que están sujetas a la prescripción, y enriquecerían sin justa causa a COLPENSIONES, no dándole valor a la figura de las restituciones mutuas. Y que no se deben devolver estos conceptos con la indexación.

Así mismo, se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, ninguna de las partes interpuso alegatos de conclusión.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se tiene que: *i)* PATRICIA MÁRQUEZ CADAVID nació el 25 de febrero de 1969; *ii)* el 21 de marzo del año 2000 suscribió formulario de afiliación a la AFP PORVENIR S.A., entidad a la cual se trasladó luego de hallarse afiliada al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; *iii)* regresó nuevamente a COLPENSIONES, el 23 de marzo de 2004; *iv)* posteriormente, el 8 de enero de 2013, se trasladó de nuevo, esta vez a PROTECCIÓN S.A., entidad en la que se encuentra afiliada actualmente.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, a los Fondos privados de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de estas últimas entidades en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado

y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación,

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

advirtiéndolo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por sí solo que se hubiere brindado una información idónea, y se

requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;

- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que los Fondos brindaron, en el momento del traslado respectivo, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, los Fondos privados incumplieron su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, al encontrarse laborando en el año 2000 con el LICEO FRANCISCO RESTREPO MOLINA en el Municipio de Envigado, llegó un asesor de PORVENIR S.A., el cual les mostró las ventajas de estar en un fondo privado como era la jubilación anticipada, sin manifestarle como acceder a la misma; que no le hablaron de la cuenta individual, de los rendimientos financieros ni de la heredabilidad de los aportes; que se

trasladó en el año 2013 a PROTECCIÓN S.A. porque estaba buscando no perder lo cotizado, debido a que ya no estaba en Colombia, y fue más que todo por la atención de servicio al cliente, ya que fue ésta entidad a la que se comunicó más fácil, pues nunca pudo comunicarse con PORVENIR S.A.; que cuando estaba próxima a cumplir los 50 años de edad, aproximadamente en el año 2019, ella misma llamó telefónicamente a PROTECCIÓN S.A. para averiguar cómo iba con el proceso de su pensión y ahí fue que le dijeron que por más que intentara no iba a poder pensionarse; y que quiere afiliarse a COLPENSIONES para poderse obtener su pensión.

De lo antepuesto no se deriva –entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores de los Fondos privados hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

De igual forma debe señalarse que si bien la demandante presentó afiliación en dos oportunidades al régimen de ahorro individual, esto no comprueba que los fondos privados hayan brindado una correcta información completa, precisa y detallada al momento de su afiliación, asimismo, los documentos aportados por PROTECCIÓN S.A. tampoco dan fe, que se le haya indicado a la actora de las ventajas y desventajas de pertenecer a este régimen, sino por el contrario solo dejan entrever que a actora no podría pensionarse en el fondo privado.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva*

quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador".

Tampoco es de recibo el argumento planteado por la AFP PORVENIR S.A. relacionado con que la demandante se trasladó del RAIS al RPM y viceversa, lo que demostraría su intención de permanecer en ese régimen. Y no lo es porque al respecto también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *"... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad"*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a devolver.

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado *"... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen..."*.

Dijo además en esa providencia, que:

"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante

su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora PATRICIA MÁRQUEZ CADAVID estuvo vinculada a cada entidad.

Todo lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Se advierte igualmente que la orden a PORVENIR S.A. y a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, contrario a lo que sostiene la apoderada de PORVENIR S.A., dicha Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en todas sus partes.

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de PORVENIR S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín, el día 5 de septiembre de 2022.

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de PORVENIR S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **34d8e419749db4054f05be943381d67895b77e2d45d0204de62762879af63804**

Documento generado en 20/04/2023 01:49:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>